



OPINIÓN



POR PABLO
CABAÑAS DÍAZ

PRESIONES DE LA ÉLITE EMPRESARIAL

En un comunicado titulado: "Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de decidir con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas", el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió, el pasado 18 de agosto de 2024, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte de Morena y sus partidos aliados Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), durante la Legislatura que iniciará el 1 de septiembre del mismo año.

En México, las élites empresariales se han caracterizado por la magnitud de sus recursos económicos y por su capacidad organizacional como es el caso del CCE, conocido como la "cúpula de cúpulas", y del indiscutible peso político que tienen el Consejo Mexicano de Negocios, agrupación que reúne a los empresarios más ricos del país.

La interacción entre los empresarios y sus organismos representativos, por una parte, y organizaciones de la sociedad civil por la otra, se intensificó visiblemente desde la elección presidencial del año 2006, a través de relaciones de cooperación y negociación, y de confrontación con sus adversarios.

Las élites empresariales participan activamente como promotoras y patrocinadoras de grupos opositores al actual gobierno como es el caso de "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad" que encabeza Claudio X. González Guajardo.

El comunicado del 18 de agosto es la respuesta en tiempo y forma a la información proporcionada por el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez quien expuso que la asociación civil de González Guajardo "ha recibido 96 millones 740 mil pesos de la embajada de Estados Unidos, y millones pesos en donaciones de personas morales como la Fundación Maelva A.C., donde participa el empresario Valentín Díez Morodo, así como la fundación Kaluz; Fundación Alsea; American Express; Grupo México, de German Larrea; Tiendas Chedraui, Fundación Soriana y Grupo Gigante, entre otros".

La exposición de Pablo Gómez de los magnates adversarios del gobierno federal nos hace recordar la campaña presidencial del año 2006, cuando el CCE, financió su guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador.

En esa época se transmitieron mensajes que atemorizaban a la población sobre una inestabilidad económica con leyendas como "apostar a algo distinto es retroceder"; o señalaban directamente que las propuestas de López Obrador endeudarían y provocarían inflación y desempleo, por lo que el ciudadano podría perder su vivienda. "No votes por una crisis".

En la elección del 2018, el entonces presidente del CCE, José Luis Barraza González, denunció que la llegada de López Obrador a la presidencia sería la de un gobierno populista, anacrónico y autoritario.

A la mitad de la administración de Enrique Peña Nieto las autoridades fiscales perdonaron 188 mil millones de pesos en impuestos a diversas empresas por cancelación y condonación de créditos fiscales, de los que tan solo 15 empresas han concentrado la mayor parte de los beneficios, de acuerdo con el informe "Privilegios Fiscales".

Beneficios inexplicables para unos cuantos", del Centro de Análisis e Investigación Fundar, se expone con datos del Servicio de Administración Tributaria que el 1% de los mexicanos son los más ricos y son dueños de 40 de cada 100 pesos de la riqueza nacional.

En el otro extremo, el 50% de la población vive en pobreza y sólo tiene 3.5 pesos de cada 100.

Para corregir esto, el Estado debe recuperar recursos de quienes más tienen y luego usarlos en favor de las personas con menos ingresos.

Los espacios de negociación, de presión e influencia que en este momento ejercen los empresarios, buscan ganar nuevos espacios de participación en la arena pública.

Se trata de tendencias que venían perfilándose desde el inicio del sexenio de López Obrador pero que se ratifican plenamente en los inicios del nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum.

La estrategia es simple: por una parte, el dirigente formal del CCE, Francisco Cervantes, busca "seguir el diálogo" con el gobierno evitando que el ala más "radical" del empresariado encabezada por Rolando Vega del Consejo Mexicano de Negocios rompa con Morena, quien ya que advirtió que la sobrerrepresentación en el Congreso distorsionaría el debate público y va a perjudicar la toma de decisiones en la democracia de México.

Entre las figuras más importantes para promover esta estrategia están los tradicionales comentaristas de radio, televisión y prensa escrita.

También los supuestos "observatorios ciudadanos" y los "centros de investigación y análisis".

Estos mimbres forman parte de redes de políticas basadas en alianzas con otros actores y organizaciones, con los que no necesariamente comparten intereses o valores, pero que tienen el objetivo de incidir y ganar espacios políticos en problemas como la inseguridad, la corrupción, la transparencia, la educación y en este momento en ganar espacios parlamentarios por la vía de la presión mediática.

La fuerza de estas "organizaciones" se finca en su supuesto carácter no lucrativo, en su declarada independencia del gobierno y de intereses políticos, y en el conocimiento técnico -que les aporta la participación de "académicos" y "expertos"- como es el caso de la mayoría de las agrupaciones que patrocina González Guajardo.

Las élites empresariales participan activamente como promotoras y patrocinadoras de grupos opositores al actual gobierno como es el caso de "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad" que encabeza Claudio X. González Guajardo